

# Los **TRASVASES** consagrarán la España de **dos velocidades**

Victor Longás Vilellas.

Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.



**L**a reciente presentación ante el Consejo Nacional del Agua del anteproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional por parte del Ministerio de Medio Ambiente ha reabierto la polémica sobre la política hidráulica en el conjunto del Estado.

Una política, que a tenor de lo expuesto en el documento y explicado por el propio ministro, está fundamentada en la transferencia de caudales entre

cuenca, en la que el Ebro se plantea como uno de los principales donantes. Es curioso leer en el documento como se habla de excedentes cuando todavía no se han realizado las obras ampliamente demandadas por los aragoneses y plasmadas en el Pacto del Agua que suscribieron en 1992 todos los partidos políticos del arco parlamentario aragonés. Unas obras que después de cerca de nueve años todavía no han visto la luz, así como unas demandas de inversiones para el aprovechamiento de esos caudales, que en caso de la transformación de regadíos han sufrido una ralentización tal que, por ejemplo, en Monegros data de principios del siglo pasado.

Asimismo, se está hablando de unos supuestos excedentes sin tener en cuenta la evolución de las precipitaciones en los próximos años, aunque si nos atenemos a los cambios climáticos que se están produciendo como consecuencia del calentamiento global, los datos que tan alegremente maneja el Ministerio pueden no tener ninguna relación con la realidad hídrica del futuro.

No obstante, desde el Gobierno de Aragón estamos analizando en profundidad el documento, con el fin de conocer de forma pormenorizada las implicaciones tanto de carácter ambiental, económico como social que puede representar para Aragón y los aragoneses de hoy y del futuro una propuesta de estas características, y poder explicarla a la sociedad aragonesa y ante el Consejo Nacional del Agua en toda su magnitud, es decir, además de los argumentos políticos y de ordenación del territorio los de carácter técnico y económico.

Desde el Gobierno de Aragón entendemos que en las sociedades avanzadas el agua constituye uno de los recursos centrales para el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos. Desde ese principio, las instituciones europeas se han declarado reiteradas veces partidarias de que el agua genere desarrollo sostenible en sus propias cuencas y, por tanto, que no se efectúen trasvases entre cuencas. Sin embargo, el Plan Hidrológico Nacional no parece tener otro objetivo que legitimar los trasvases, porque, de no ser así, al Gobierno central le hubiera

bastado con incorporar los respectivos planes de cuenca, aprobados previamente por su respectivos organismos.

Asimismo, desde el Ejecutivo autónomo entendemos que, tal como los plantea el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, los trasvases del Ebro a Cataluña, Valencia, Murcia y Almería no se pueden justificar en la solidaridad interterritorial, puesto que no es solidario ni progresista dar más a quienes más tienen y, en este caso, los mil hectómetros cúbicos que se pretenden extraer del Ebro aumentarían las desigualdades entre comunidades, consagrando la España de dos velocidades: la del arco mediterráneo, rica poblada, desarrollada; la del interior, cada vez más pobre, más despoblada y menos modernizada. Además, en muchos casos, con menor financiación europea.

El Gobierno de Aragón quiere recordar que el Plan Hidrológico Nacional no debe producir fracturas entre territorios y comunidades del Estado, por lo que espera que no sea aprobado contra la voluntad de ninguna de ellas. En este sentido, el Gobierno de Aragón hubiera creído conveniente que el Plan Hidrológico Nacional hubiera sido debatido antes y negociado con las comunidades autónomas, en lugar de ser mantenido bajo un secreto que sólo puede ser entendido como un intento de limitar al máximo el debate y la participación de las comunidades autónomas afectadas por los efectos de los trasvases. Por esa misma lógica, este Gobierno espera que el Plan Hidrológico Nacional abra ahora un amplio debate social sobre la política hidráulica que conviene a España y que el Gobierno Central no se apoye en su mayoría absoluta para aprobar una ley que necesita el voto de los principales partidos parlamentarios de las Cortes Generales.

El pasado día ocho de octubre, unos 400.000 aragoneses se manifestaban en Zaragoza en contra del trasvase del Ebro. Esa muestra de apoyo popular en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma nos da al Gobierno de Aragón más argumentos, además de los técnicos, para oponernos con todos los medios democráticos a nuestro alcance contra este Plan Hidrológico Nacional. Un plan que para todos los aragoneses significa el puro trasvase del Ebro.

No obstante, como Gobierno estamos a favor de que se resuelvan los problemas hidráulicos en España y creemos que estamos en condiciones de demostrar que existen soluciones, en concordancia con la Directiva Europea del Agua, más económicas, más ecológicas y que favorecen un desarrollo más sostenible del conjunto del Estado.

En definitiva, tenemos que debatir sobre el agua, pero también sobre el modelo de desarrollo territorial que se quiere abordar en el Estado de las autonomías. •